

## LA DIGNIDAD DE LA JUSTICIA

EL MUNDO. 17/02/1997 Página, 14

AURORA PAVON

El ojo abierto y el oído indiscreto de una cámara de vídeo han permitido observar y oír a un Felipe González muy enfadado porque el Gobierno del PP no interviene en las actuaciones de los magistrados del Tribunal Supremo -como en las relativas a los interrogatorios a los dirigentes de HB- tal y como lo hacía él en sus tiempos de jefe del Ejecutivo. El fugitivo González sigue con tono de estadista indignado y olvida que ya no está en el poder para hacer de su capa un sayo, y mangas y capirotos con las togas del alto tribunal que tarde o temprano lo habrá de juzgar, y nosotros que lo veamos por el bien de la Justicia y la verdad.

Este incidente televisivo y el reciente encarcelamiento del juez corrupto y prevaricador, Pascual Estevill, nos traen a los primeros planos de la actualidad el incesante debate sobre la necesaria recuperación de la independencia y la dignidad de la Justicia española, que está bajo mínimos en los sondeos de opinión y necesitada de apoyo social y de la reforma a fondo de sus órganos y normas de dirección (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Algo que no hacen ni quieren el Gobierno, ni el Parlamento, ni los partidos por causa de sus pactos y repartos del poder, y que es lo que empieza a hacer la sociedad civil. Así se verá el día 20 en el Palacio de Congresos de Madrid durante un acto público que un grupo de destacados juristas ha organizado Por la dignidad e independencia de la Justicia (veremos si asiste la RTVE de López-Amor, dado que la crisis de la Justicia es asunto de interés general). Un acto que contará con la presentación del periodista Antonio Herrero, y en el que intervendrán Federico Carlos Sainz de Robles, Enrique Gimbernat, Joaquín Navarro y Antonio García Trevijano.

Una convocatoria que despierta especial interés en muchos ciudadanos, en círculos de la magistratura y la abogacía y de manera especial en la universidad. Y una convocatoria cuya sola existencia pone de relieve el difícil momento que atraviesa la Justicia, agredida desde los flancos más fieros de la sociedad por los criminales de ETA como los que asesinaron al magistrado Martínez Emperador, y por los jefes del otro terrorismo, el de los GAL y la corrupción. Los mismos que tratan de impedir la acción de la Justicia, con la ayuda de cómplices dentro del Poder Judicial y de la magistratura que siguen con más discreción algunos de los malos pasos de Estevill.

Lo vimos en fechas recientes con motivo de los sumarios de los GAL, con las trabas puestas a la declaración de González en el sumario de Marey, o en la entrega de los papeles del Cesid, por parte de los gobiernos del PSOE y del PP, a los magistrados que los exigen. Y en las descaradas campañas y obscenas maniobras desatadas contra los jueces, magistrados y fiscales que instruyen los sumarios del crimen de Estado y la corrupción.

Un denigrante acoso, promovido por sectores felipistas de la política y la información, sufrido, una y otra vez, por los jueces Garzón y Gómez de Liaño, o por los fiscales Gordillo, Fungairiño, Márquez de Prado, etcétera, por citar casos aún recientes, que merecen el apoyo y el calor ciudadano que ve en ellos a esa gran mayoría de jueces y fiscales -como los que piden los papeles del Cesid, envían a la cárcel a Estevill o citan a declarar a los jefes de ETA y de los GAL- que cumplen con su función y que se ven denigrados por ciertos personajes infames de la clase política, muchos de ellos escondidos y amparados en su inmunidad parlamentaria para huir de la ley, que consideran que la agresión y desprestigio de la Justicia o de ciertos jueces y fiscales es la única manera posible de reducir, ante la sociedad, el impacto de sus responsabilidades en la corrupción, el robo de los fondos reservados, el abuso de poder y los crímenes de los GAL.